

# DISCURSO

LEÍDO POR EL EXCMO. SEÑOR

D. JOSÉ ESTRADA Y ESTRADA

MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

EN LA

SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES

CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1930



MADRID

EDITORIAL REUS (S. A.)

Preciados, 1 y 6 - Apartado 12.250

1930

FAN  
XX  
438







# DISCURSO

LEÍDO POR EL EXCMO. SEÑOR

D. JOSÉ ESTRADA Y ESTRADA

MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA



# DISCURSO

LEÍDO POR EL EXCMO. SEÑOR

D. JOSÉ ESTRADA Y ESTRADA

MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

EN LA

SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES

CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1930



MADRID

EDITORIAL REUS (S. A.)

Preciados, 1 y 6 - Apartado 12.250

1930



R.66181

TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA «EDITORIAL REUS» (S. A.)  
Ronda de Atocha, 15 duplicado. Madrid. (3416)



EXCMOS. E ILMOS. SRES.:

SEÑORES:

El art. 628 de la ley Orgánica previene que en la apertura de Tribunales leerá el discurso inaugural el Ministro de Gracia y Justicia; y si tal precepto entrañara deber riguroso, jurídicamente exigible, no obligaría con mayor fuerza a quien en este acto tiene la honra altísima de presidir a tan esclarecida representación de la Administración de Justicia española, para dar comienzo, con una festividad simbólica y solemne, a las tareas del nuevo año judicial. Porque, aparte de las categorías que la ciencia del Derecho ha establecido para la clasificación sistemática de las obligaciones, cabría, acaso, constituir un grupo con todas aquellas que, como la que en estos momentos cumplo, reúnen la doble condición de ser honrosas y gratas, y que, por tanto, no podría lícitamente rehuir el que sienta por la toga todo el amor y todo el respeto de quien nació en hogar presidido por ella y en comunión con los Tri-

bunales ha vivido durante los años, ya no breves, de su continuada actuación profesional.

Ello mismo me anima a no solicitar la benevolencia de cuantos me escuchan, pues, dirigidas estas palabras a quienes tan dignamente representan a la Magistratura y a los que con ella coadyuvan en su excelsa función, me basta con pedir, como en nuestros escritos y en nuestros informes lo realizamos a diario, que se nos haga la justicia cuyo nombre invocamos, porque sabemos que así se cumplirá la suprema norma de rectitud de no exigir a nadie lo que sabemos que estrictamente no puede ofrecernos.

Con lo dicho se demarca ya, claramente, la significación de este discurso: no ha de ser disertación académica que minuciosamente analice y discuta algún tema de alta especulación doctrinal, pues, sobre resultar quizá inadecuado tal género de estudios para ceremonias como la presente, faltarían hoy, en todo caso, a su autor dotes y condiciones para desempeñar tal cometido con la brillantez que reclaman el auditorio y la ocasión; y tampoco ha de ser exposición detallada de un programa de Gobierno, porque si en otras circunstancias se explica que un Ministro aproveche la oportunidad que brinda este momento para adelantar algo de sus propósitos, no parece discreto que lo hiciera quien ocupó

cargo tan superior a sus merecimientos y tan distante de sus esperanzas, respondiendo al imperativo conjunto de la voluntad que generosamente lo ensalzaba y al convencimiento de que no le era dable negar la modesta aportación de su personal esfuerzo cuando en ello hubiera, acaso, tanto de gloria como de riesgo. El Ministro de Gracia y Justicia de un Gabinete que cifra su principal empeño en restaurar la normalidad jurídica, durante varios años interrumpida, no puede articular grandiosos planes de reforma, sino que ha de limitarse por ahora a caminar con paso firme por la arriscada senda que un deber primordial le traza, procurando que, cuanto antes y del modo más perfecto posible, se restablezca aquel sosegado ordenamiento y régimen del mundo del Derecho, que constituye la primera garantía de la paz pública y ha de ser la base insustituible de cualesquiera modificaciones o retoques en las instituciones que integran el país.

Acotado así el campo de lo que pudiera ser tema de mi discurso en este día, sólo me resta exteriorizar, sencillamente, mis sentimientos sobre la justicia y sus sacerdotes; condensar mi experiencia de hombre que ha vivido en íntimo contacto con la función judicial y que se ha asomado asimismo a la gobernación del país y expresar, en una palabra, lo que podría llamarse una vibración

espiritual, ante la misión augusta de los Tribunales en un régimen moderno de estado de Derecho.

Con ello queda dicho que mi propósito es modesto, como lo son mis fuerzas, y no necesito siquiera agregar que en mis manifestaciones resplandecerá aquella virtud de la sinceridad que con razón calificó Carlyle de masculina, y que no consiste en aprovechar el momento para zaherir con alevosía, pero tampoco consiente expresiones de halago que pugnen con honrados convencimientos. Hablaré como si presentara ante vosotros lo más recóndito de mi conciencia, y lo haré, desde luego, con la apetecible brevedad, que si es siempre complemento de una obra buena, ayuda a perdonar las deficiencias de la que es pobre e imperfecta.

\* \* \*

Nuestra Constitución de 1876, queriendo realizar simultáneamente una demarcación de funciones y una implícita formulación de conceptos, dice en su art. 76 que «a los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado». Y, en esta fijación de órbita, se advierte claramente que predomina y se rei-

tera una nota de exclusividad, porque resulta privativa de los Tribunales la misión de juzgar, pero, a su vez, ninguna otra puede incumbirle.

Y se concibe que así ocurra. Sigue fundado todo el Derecho público actual en la tesis expuesta por Montesquieu acerca de la división de poderes, pese a rectificaciones aportadas en cuanto a la exactitud de interpretación histórica que la motivara o al sentido mecanicista a que propendiera. Pero, es lo cierto, que el espíritu de amor a la libertad y a las garantías jurídicas en que se inspiró el insigne escritor, continúa animando las leyes fundamentales de los Estados, y que el sistema que él preconizó es el que sirve de base a las Constituciones vigentes.

Eje cardinal de la doctrina es la separación neta entre la potestad legislativa y la judicial, de modo que la primera, mirando al futuro, trace con caracteres de generalidad justiciera la ordenación de cada materia o ramo; y la segunda, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, haga la más acomodada aplicación del precepto legal para que triunfe la justicia.

Usurpación de las funciones judiciales realizaría, en buena técnica, un acto parlamentario que fallase asuntos singulares y específicos, como entrañaría invasión perniciosa el caso de un Tribunal que en su sentencia quisiera establecer reglas am-

plias y obligatorias *erga omnes* en punto a la cuestión controvertida.

No se requiere insistir más para comprender toda la inmensa trascendencia de la excelsa misión encomendada a los Tribunales de Justicia. Si la ley se elabora mediante la expresión, democráticamente articulada, del sentimiento jurídico de la Nación, son luego los funcionarios judiciales los que están encargados de hacer que esa ley se cumpla y de evitar que sus disposiciones se infrinjan por la codicia y la pasión de parte contraria o por la desatendida intervención de mal aconsejados organismos oficiales.

Porque no son sólo las agresiones originadas por el interés privado las que obligan a una intervención del Poder judicial, ni siquiera son las más importantes y graves. Es que, hoy, se va reduciendo a lo estrictamente indispensable el campo en que los órganos del Estado actúan sin sujeción a revisión jurisdiccional, y muchas resoluciones, antes exentas de toda fiscalización, quedan ahora sometidas, con amplitud cada día mayor, al fallo de la jurisdicción contenciosa.

Con ello, el orden civil, el penal y el administrativo resultan amparados, en cuanto a las garantías que el ciudadano necesita, por aquella posible apelación a los Tribunales que constituye, en definiti-

va, la mejor seguridad de sus derechos. Y es tan eficaz, tan vigorosa y tan suprema esta defensa, que en algunos países se ha confiado al Poder judicial la revisión de la constitucionalidad de las leyes y en todo Estado moderno puede estimarse que la verdadera garantía política consiste en una intervención judicial efectuada con independencia y decisión.

Acaso, nada haya contribuido tanto a afirmar en Inglaterra el régimen de Derecho en que aquella nación vive, desde hace largo tiempo, como la actuación serena y gallarda de sus Jueces defendiendo a los nacionales contra cualesquiera extralimitaciones del Poder ejecutivo. Tal convencimiento profesa, de tan consoladora verdad, quien esto afirma, que no podría, a su juicio, subsistir en ningún país una subversión morbosa del orden jurídico-político sin que una Magistratura, dotada de medios idóneos, opusiera a ello la resistencia invencible de su sincera profesión de fe jurada.

Por muy poderoso que fuera el Ministro que decretara una medida ilegal, más poderoso sería el Juez que, escudado con la ley misma, negara el cumplimiento del acuerdo injusto adoptado. Y así, la detención arbitraria prolongada sucumbiría ante el acuerdo judicial de excarcelación; la confiscación de bienes, tortuosa o solapadamente decidida, tropezaría con el valladar infranqueable de los Tri-

bunales que amparasen en su propiedad al presunto despojado; los ultrajes al honor personal, aunque procuraran adornarse con la vestidura de actos de Gobierno, no quedarían privados de condigna sanción; y siempre y en todo momento en que la libertad personal, el patrimonio legítimo o la dignidad del ciudadano sufrieran el ataque de la arbitrariedad, los Tribunales de justicia, fieles a su sagrada misión, restablecerían el imperio del Derecho, impidiendo la consumación de propósitos reñidos con el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, que una actuación persistente de la potestad judicial, contenida en sus estrictos límites, pero incapaz de doblegarse ante coacciones o amenazas, frustraría la implantación de un régimen anormal y patológico, pues, la tenaz rebelión contra el desafuero, estimularía la confianza del particular y privaría de medios eficaces de acción a las usurpaciones intentadas por quienes abusaran de su autoridad.

Ahora bien; para que estas finalidades se logren, se requiere una condición previa y esencialísima: la independencia efectiva, y no meramente teórica, de quienes estén llamados a tan espinoso como noble ministerio.

Bien sería que para ello se comenzara por restituir a los Tribunales de Justicia su verdadera función, tanto reintegrando a la potestad judicial (y



cuando hablo de ésta me refiero a la que por antonomasia merece ese nombre, o sea a la jurisdicción ordinaria) las materias que se han ido substrayendo a su conocimiento, como descartando de la actuación de la Magistratura cuanto no pertenezca, en puridad, a su esfera peculiar. De esta suerte y huyendo todo lo posible de mezclar a los Tribunales en asuntos ajenos a su privativo cometido, podrían los funcionarios judiciales sentir vigorizada su posición y cuidar amorosamente de que nada la hiciera desmerecer en el público concepto, a lo cual contribuiría, de modo positivo, la intervención personal, y no delegable, en actuaciones y diligencias, para que el diario contacto de Jueces y justiciables hiciera sentir a éstos todo el respeto que ha de tributarse a la Justicia y a los encargados de administrarla.

También sería, de fijo, remedio eficaz contra males presentes, en lo que a este punto se refiere, una reforma ponderada de nuestro enjuiciamiento que robusteciera la actuación del juzgador, aumentando considerablemente sus facultades en el proceso civil y dotando al procedimiento de mayor flexibilidad para acomodarlo a la rapidez y agilidad que demanda la época moderna, en que los progresos de la técnica han impulsado la vida con un dinamismo prodigioso, a pesar de lo cual y sin lograr adecuación a las nuevas exigencias, prosigue, im-

pertérrita, su marcha, perezosa y tradicionalista, nuestra práctica rituarial.

Pero la clave de la independencia hay que buscarla en otro elemento: en el factor personal, y en las circunstancias de que debe rodearse su actuación. Quien nació y creció en una familia atendida a la retribución que perciben nuestros funcionarios judiciales, sabe por experiencia directa, y sin necesidad de que nadie se lo refiera, toda la estrechez penosa en que Jueces y Magistrados han de vivir para que la modestia de sus recursos no desdore el brillo de la función que les está atribuida.

Honra de nuestra carrera judicial, y gloria indiscutible de sus individuos, es la de que no exista la claudicación lamentable por móviles económicos: la limpieza de conducta ha permitido que se perpetúe, a través de agobios y tristezas, el lustre inmaculado de una Magistratura que no cometió el crimen gravísimo de simonía judicial, vendiendo, por más o menos precio, la justicia.

Pero, aun así y todo, es tan rudo el contraste entre la penuria en que se mueve el funcionario y la opulencia de los litigantes sobre cuyos derechos falla; es tan notoria y tan injusta la situación de inferioridad en que se encuentra con respecto a profesionales de rango análogo, cuando no menos elevado; es tan patente todo esto y tan imprescindible

remediarlo, que a nadie podrá parecer inmotivada la honda preocupación que el Gobierno siente por la situación de los funcionarios judiciales, ni desproporcionado su anhelo de demostrarla, ofreciendo a la Magistratura una prueba de la consideración que le merece.

No ha de olvidarse, sin embargo, que, a la postre, la independencia tiene su raíz en un movimiento espiritual: podrá el cimiento económico ser condición casi indispensable para su ejercicio; podrán el vigor mental y la disciplina científica servir de eficaces coadyuvantes; pero, en definitiva, la independencia nace con el sentimiento de la propia valía y con el convencimiento de la misión que se realiza, y una vez arraigados aquel sentimiento y esta convicción, el juzgador se da cuenta de la autoridad que posee, y sintiéndose ligado a una tradición secular y venerable, encuentra en todo ello la más firme garantía de su falta de supeditación a toda clase de indicaciones o exigencias. La independencia, en suma, se logra siempre que el Poder judicial tiene conciencia clara de su augusta función, y cada vez que uno de los individuos que lo componen adquiere concepto preciso de que pertenece a aquel poder, ha de estar a la altura que esto exige, no le es lícito transmitir mermado a su sucesor el depósito de prestigio que él recibiera, y ha de arrostrar

impasible las consecuencias de sus actos, porque, recordando el lema de cierta vieja escuela penal, el Juez no ha de pensar sino en que la justicia resplandezca: *fiat justitia et pereat mundus*.

Pero, entiéndase bien: esa independencia, ese sentirse miembros solidarios de la organización judicial, ni reclama, ni consiente la agrupación profesional de Jueces en Asociaciones que la pluma se resiste a calificar de Sindicatos. Concíbense éstos como un medio que en la lucha áspera por la vida han tenido que forjar quienes se sentían desamparados y necesitaban un instrumento de combate para afirmar sus derechos a ocupación estable y remuneración decorosa. Pero no pueden explicarse análogos movimientos en los funcionarios públicos que han conseguido un Estatuto donde se consagran, con eficacia jurídica perfecta, sus derechos dentro de la Corporación a que pertenecen: cuando el ciudadano se convierte en funcionario, adquiere el *status* especial que la función a él asignada representa, y la mayor suma de derechos y garantías que así recibe compensa la inevitable limitación de otras actuaciones, que son legítimas en el particular, pero que están vedadas a cuantos viven en la intimidad de un servicio público, conocen sus secretos, y pueden utilizar reprobablemente en beneficio propio, individual o de casta, los atributos mismos de poder

que la sociedad colocó en sus manos para la defensa del interés general contra apetitos o codicias.

Si la misión que se les encomienda constituye un verdadero sacerdocio; si la Ley quiso por eso hacerlos casi sobrehumanos, multiplicando las incapacidades e incompatibilidades, y exaltándolos a la altura en que deben hallarse quienes disponen de las vidas, honor y hacienda de sus semejantes, ¿podría contemplarse sin dolor el espectáculo de sus Asociaciones, que sería el de su división interna, ni cabría resignarse, impasible, a ver cómo batallaban en la misma forma que lo hacen por la jornada o el salario los trabajadores del obrerismo militante?

Y de otra parte, ¿parecería propio de ningún gobernante, digno de este nombre, asistir en silencio al ejemplo demoledor de lo que, al fin y al cabo, no sería otra cosa que una expresión permanente de rebeldía en la mansión augusta donde sólo la serenidad y la templanza deben tener legítimo acomodo?

Por dicha, en la Magistratura española no ha decaído un solo instante el austero espíritu de vocación que es la base, amplia y recia, sobre que se destacan, señeramente, sus preclaras virtudes.

Y nada más, señores: un azar imprevisto me trajo a este puesto y me ha conferido con ello honor altísimo que no podré nunca olvidar. Siento, en el día de hoy, haber defraudado vuestras esperanzas, si por acaso, errando una vez en el juicio valorásteis con generosa largueza mis aptitudes. Pero me queda la tranquilidad de haberos rendido el único homenaje que podía exigirse de la modestia de mis fuerzas: el de la sinceridad; porque me propuse dejar que ante vosotros hablaran, en voz alta, el corazón y el pensamiento y porque confío en que mis hechos serán expresión fiel y cumplida, mucho más que pudieran serlo mis palabras, del profundo respeto que me inspira la función a que consagráis vuestra vida, para garantía y beneficio de vuestros conciudadanos y mayor grandeza de nuestra Patria.

HE DICHO

ESTADOS





## NÚMERO 1

### RESUMEN de asuntos civiles despachados por el Tribunal Supremo en el año judicial próximo pasado.

Total de asuntos civiles.....		2.220	
Competencias.....		625	
Cumplimiento de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros.....		4	
Recursos de pobreza.....		25	
Recursos de revisión.....		2	
Recursos de fuerza.....		»	
Recursos de responsabilidad.....		»	
Recursos de nulidad.....		»	
Recursos de súplica.....		8	
Recursos de queja.....		46	
Total de recursos despachados....		1.510	
Que terminaron por desistimiento o deserción.....		601	
ADMITIDOS	Por quebrantamiento de forma.	En que se declaró no haber lugar a la ca- sación.....	53
		En que se casó la sen- tencia.....	7
	Por infracción de ley o doctrina legal.	En que se declaró no haber lugar a la ca- sación.....	401
		En que se casó la sen- tencia.....	91
	Denegados.....		385

El Secretario de Gobierno,  
*Juan G. Bermúdez.*

*Madrid, 15 de Julio de 1930.*

## NÚMERO 2

### RESUMEN de los recursos de casación en materia criminal despachados por el Tribunal Supremo en el año judicial próximo pasado.

A D M I T I D O S			
Por infracción de ley.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	201	
	En que se casó la sentencia.....	82	
Por quebrantamiento de forma.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	28	
	En que se casó la sentencia.....	3	
Contra sentencias imponiendo pena de muerte.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	3	
	En que se casó la sentencia.....	»	
Contra sentencias dictadas en juicios de faltas.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	18	
	En que se casó la sentencia.....	12	
Contra sentencias dictadas en asuntos de imprenta.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	2	
	En que se casó la sentencia.....	»	
Contra sentencias dictadas en causas de contrabando.	En que se declaró no haber lugar a la casación.....	»	
	En que se casó la sentencia.....	»	
Total de asuntos despachados.....			1.091
Que terminaron por desistimiento o deserción.....			602
Denegados.....			140

*Madrid, 15 de Julio de 1930.*

El Secretario de Gobierno,

*Juan G. Bermúdez.*

# NÚMERO 3

## RESUMEN de los negocios criminales, a excepción de los recursos de casación, despachados por el Tribunal Supremo en el año judicial próximo pasado.

Recursos de queja.	CAUSAS TERMINADAS POR				Causas en que conoce el Tribunal pío.	Juicios de residencia .....	Competencias .....	Recursos de fuerza .....	Recursos de revisión .....	Informes sobre indultos .....	TOTAL de negocios criminales.
	Sobre- se- miento.	Senten- cias abso- lutorias.	Senten- cias conde- natorias.	TOTAL de causas.							
12	»	»	»	»	»	»	15	»	1	12	40

Madrid, 15 de Julio de 1930.

El Secretario de Gobierno,  
*Juan G. Bermúdez*

# NÚMERO 4

## RESUMEN de los asuntos contencioso-administrativos despachados por la Sala 3.<sup>a</sup> del Tribunal Supremo en el año judicial próximo pasado.

RECURSOS					APELACIONES					Recursos caduca- dos de oficio y desistidos por las partes	TOTAL		
Confir- maciones totales de reso- luciones impugna das	Revo- caciones totales de reso- luciones impugna das	Confir- maciones o revo- caciones par- ciales	Nullidad de reso- luciones impugna das	Se declara la Incom- petencia de juris- dicción	INCIDENTES	Confir- maciones de Autos y Senten- cias apeladas	Revo- caciones de Autos y Senten- cias apeladas	Confir- maciones o revo- caciones parciales	Nullidad de senten- cias apeladas	Desistias o desisti- das	Re- cursos de queja		
199	92	16	16	55	418	343	100	22	22	138	12	299	1.732

Madrid, 15 de Julio de 1930.

El Secretario de Gobierno,  
*Juan G. Bermúdez.*

## Año 1929 a 1930

**RESUMEN de los asuntos terminados por los Tribunales provinciales de la jurisdicción Contencioso-administrativa durante el año próximo pasado.**

AUDIENCIAS	Por sentencias y excepcio- nes admitidas.	Por caducidad y desis- timiento de parte.	TOTAL
Albacete....	19	7	26
Alicante .....	22	12	34
Almería.....	36	17	53
Ávila .....	19	10	29
Badajoz.....	30	9	39
Baleares (Palma).....	12	2	14
Barcelona.....	58	81	139
Burgos.....	35	12	47
Cáceres.....	15	1	16
Cádiz.....	30	7	37
Canarias (Las Palmas).....	9	16	25
Castellón.....	19	7	26
Ciudad Real .....	12	4	16
Córdoba .....	16	4	20
Coruña.....	28	19	47
Cuenca.....	22	12	34
Gerona.....	10	15	25
Granada.....	40	85	125
Guadalajara.....	11	"	11
Guipúzcoa .....	24	4	28
Huelva.....	21	7	28
Huesca.....	14	5	19
Jaén .....	27	18	45
León .....	43	15	58
Lérida .....	34	11	45
Logroño .....	10	9	19
Lugo.....	22	8	30
Madrid.....	200	74	274
Málaga.....	66	10	76
Murcia.....	28	29	57
Navarra.....	31	3	34
Orense.....	34	16	50
<i>Suma y sigue. ....</i>	997	529	1.526

AUDIENCIAS	Por sentencias y excepcio- nes admitidas.	Por caducidad y desis- timiento de parte.	TOTAL
<i>Suma anterior.....</i>	997	529	1.526
Oviedo.....	51	21	72
Palencia.....	16	8	24
Pontevedra.....	37	22	59
Salamanca.....	32	7	39
Santander.....	37	15	52
Segovia.....	4	7	11
Sevilla.....	48	16	64
Soria.....	11	12	23
Tarragona.....	16	1	17
Teruel.....	36	15	51
Toledo.....	29	11	40
Valencia.....	52	51	103
Valladolid.....	23	7	30
Vitoria.....	34	5	39
Vizcaya.....	64	21	85
Zamora.....	24	8	32
Zaragoza.....	44	4	48
TOTAL....	1.555	760	2.315

*Madrid, 15 de Julio de 1930.*

El Secretario de Gobierno.  
*Juan G. Bermúdez.*



